

Podés bajar la nota completa [acá](#)

CLAVES DE LECTURA

Con el cambio de gabinete económico se puso en la agenda pública el debate sobre la reducción de los aportes y contribuciones que trabajadores y empleadores del sector formal pagan para financiar diversas prestaciones de la Seguridad Social.

Iniciativas similares se llevaron a cabo a lo largo de la década del noventa. En ese entonces, el principal argumento se encontraba en la necesidad de reducir costos laborales para ganar competitividad. El consenso sobre estas medidas pudo lograrse gracias a los supuestos efectos beneficiosos en el empleo y la formalidad que esto traería: los empresarios contratarían más personal en puestos formales dado que serían más competitivos, al ver reducidas las contribuciones y aportes a la seguridad social.

La experiencia de las llamadas “devaluaciones fiscales” durante la convertibilidad ha sido claramente negativa. Lejos de observar un incremento del empleo formal, lo que se produjo fue un notable aumento del desempleo y la informalidad, y una pérdida en la recaudación para financiar la seguridad social que terminó motivando políticas de ajuste en las jubilaciones, como el famoso 13% de recorte durante 2001.

A pesar de sus antecedentes, estas medidas parecen haber vuelto a ganar popularidad de acuerdo con la agenda que impulsa el gobierno nacional.

Es así que los viejos debates regresan, abstrayéndose de experiencias históricas que en Argentina son relativamente recientes y demostraron que políticas de estas características suelen pecar de ingenuas o, cuando menos, de un optimismo que poco contacto tiene con la realidad de un mercado de trabajo tan heterogéneo como el argentino, en el que hay diversas

problemáticas multicausales en torno a la informalidad y la precariedad
laboral.